BASE Investigaciones Sociales

INFORMES ESPECIALES

N°30. DICIEMBRE - 2019

# 2019 ¿UN AÑO PERDIDO? ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS SOBRE EL AÑO QUE CULMINA

Abel Irala
Santiago Ortiz

## Presentación

Este informe se ha elaborado en base a entrevistas con dirigentes de cinco Organizaciones Campesinas de carácter nacional, con el propósito de conocer la mirada del campesinado organizado en cuanto a lo que fueron en el 2019 las políticas agrarias y la situación de la tierra, además de las perspectivas para el año próximo. Se podrá apreciar en su lectura, que existe una mirada similar -no muy alentadora- respecto a las acciones del gobierno. Las principales preocupaciones o puntos negativos expresados por las diferentes organizaciones resultan coincidentes, así como las perspectivas futuras.

Todas las entrevistas se han realizado durante el mes de diciembre de este año 2019 y se expresan de forma resumida en el presente informe, luego de una breve introducción al tema a partir de la caracterización del movimiento campesino y el gobierno de Mario Abdo Benítez. Agradecemos a las organizaciones campesinas que tan gentilmente han accedido a las entrevistas y han compartido sus análisis acerca de la situación nacional y del accionar estatal respecto a los acuciantes problemas que afectan a los sectores rurales.

## Campesinos y campesinas la fuerza en organización:

El sector campesino atraviesa una aguda crisis social y económica; los pequeños productores de alimentos para el consumo familiar y que destinan parte de la producción a la renta, es decir, al mer-

cado interno, corren riesgo de desaparecer. La agricultura campesina ocupa hoy apenas un poco más de 300.000 hectáreas, el 6.4% de las tierras cultivadas en el país[1], mientras el agronegocio sigue avanzando a un ritmo acelerado con un crecimiento exponencial de 118% en materia de ocupación territorial en los últimos 15 años[2].

El avance del agronegocio genera también una acelerada concentración de la tierra, menos del 3% de los propietarios poseen el 85% de las tierras del país. Despojados por diversas vías del principal medio de producción, los campesinos y campesinas se ven forzados a migrar a las ciudades, desplazamiento que se da con frecuencia como última opción. Desde la década de 1990, Paraguay empezó a tener una mayor población urbana no como fruto de un proceso de industrialización o planificación urbana, sino como un avance desmedido de las fronteras de la agricultura mecanizada. Según el último Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2012, el 58.9% de los habitantes vive en zonas urbanas, fenómeno que se ha ido profundizando en los últimos años. Según datos de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos, en el año 2018 solo el 38.3% de la población vivía en áreas rurales y para el 2025 esta cifra descendería a 35%[3].

Estas condiciones afectan también la capacidad organizativa del campesinado. Revisando su historia reciente podemos ver que tras la caída de la dictadura, el movimiento campesino entró en una fase de recomposición donde sus "organizaciones nacionales y regionales se encontraban nucleadas y coordinadas entre sí, y la influencia de las mismas era importante en casi todos los Departamentos de la Región Oriental, donde se llevaron a cabo numerosas ocupaciones de tierra, muchas de las cuales lograron convertirse en asentamientos"[4], llegando al punto de establecer espacios de articulación y unidad que levantaron la principal reivindicación y proyecto político del campesinado hasta el día de hoy, la Reforma Agraria Integral.

Con esta unidad de acción las organizaciones campesinas protagonizaron las más grandes movilizaciones que pudieron verse en la década de 1990, y tuvieron una incidencia fundamental en la resolución de la Crisis de Marzo de 1999 durante la destitución del presidente Raúl Cubas Grau. También en 2002, el movimiento campesino fue la fuerza gravitante que logró frenar las privatizaciones y la Ley Antiterrorista, impulsadas ambas por el gobierno de Luis Ángel González Macchi. Probablemente en ese momento la influencia política y social del campesinado organizado había llegado a uno de sus picos más altos.

Tras este periodo de importantes acciones de masa, se ha notado un proceso de fragmentación del movimiento y una agudización de la criminalización hacia las protestas campesinas, en paralelo a la consolidación del modelo de agronegocios (antagónico con la agricultura campesina); aun así, fue un actor clave en el triunfo electoral de la Alianza Patriótica para el Cambio, que llevaría a Fernando Lugo a la presidencia de la república (2008-2012) ca-

*"...el movimiento campesino fue la fuerza gravitante que logró frenar las privatizaciones y la Ley Antiterrorista, impulsadas ambas por el gobierno de Luis Ángel González Macchi. Probablemente en ese momento la influencia política y social del campesinado organizado había llegado a uno de sus picos más altos".*

1 Ortega, G. 2019. "El avance del agronegocio sigue firme". En Con la Soja al Cuello 2019. Disponible en http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2019/12/SAC19web_compressed.pdf

2 Ávila C., Sarta A. 2018. Mapeando el Agronegocio. (Asunción: BASE-IS)

3 Paraguay. Proyecciones de población nacional, áreas urbana y rural, por sexo y edad, 2018 https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/datos/poblacion/Paraguay_Triptico%202018.pdf

4 Canalización de demandas de los Movimientos Sociales al Estado paraguayo. pp. 61 http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2018/08/2018Jun_Canalizacion-de-demandas.pdf

racterizado por su cercanía a las bases y comunidades campesinas.

La segunda década del 2000 abre un escenario complejo y hostil para el movimiento campesino. El avance de las fuerzas conservadoras en el país y en la región, las diferentes formas de persecución a la lucha campesina y una política estatal orientada a favorecer las políticas empresariales del agro lo ubican en una situación distinta a la de los años noventa. Sin embargo su influencia dentro de la coyuntura política sigue siendo relevante, constituyéndose en el actor social con mayor capacidad de movilización en las calles y de confrontación con los gobiernos por sus históricas demandas.

Las reflexiones de sus dirigentes dan cuenta de una lectura política profunda de la realidad y rescatan mayormente la necesidad de un nuevo espacio de unidad del movimiento a fin de avanzar en sus objetivos estratégicos, defensa de sus territorios, recuperación de tierras y soberanía alimentaria.

## 2019 crisis política y de legitimidad gubernamental

Durante el año 2019 se ha puesto de manifiesto la crisis de legitimidad del gobierno de Mario Abdo Benítez quien accedió a la presidencia en agosto de 2018, con menos de 4% de ventaja sobre su opositor (Efraín Alegre), envuelto en denuncias de fraudes y con la mayor crisis interna del Partido Colorado en toda la historia posdictadura.

El gobierno sufrió su mayor perturbación cuando estuvo a milímetros de un juicio político por haber firmado el acta bilateral del 24 de mayo pasado, sobre la compra de potencia de Itaipú que beneficiaría al Brasil, un acuerdo que se intentó mantener en secreto, demostrando su total incapacidad en temas energéticos, de relaciones internacionales y en cuestiones de soberanía nacional. Algunos sectores de mucho poder nacional e internacional operaron a favor del "salvataje" a Mario Abdo Benítez, pero fue inevitable la renuncia y destitución de importante hombres de su gabinete. De allí en adelante se tuvo un gobierno en decadencia, criticado y burlado por la opinión pública, pero respaldado por minúsculos grupos de gran poder económico, que desde allí tienen mayor influencia en el pálido gobierno colorado.

Así el ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Horacio Torres, fue prácticamente obligado a renunciar[5] por presión de los gremios empresariales para que en su lugar asuma un hombre de confianza de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP). Los cambios y recambios de un gobierno agobiado por la crisis política también impactaron en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con la asunción de Rodolfo Friedmann, persona que fue muy criticada por varios gremios empresariales y sociales, pero al final consiguió un voto de confianza por parte de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), un tiempo de gracia para "ganarse la confianza de la gente"[6].

Otro cambio importante ocurrió en el Ministerio del Interior, con una figura clave en el proceso de crimina-

***"...un gobierno en decadencia, criticado y burlado por la opinión pública, pero respaldado por minúsculos grupos de gran poder económico, que desde allí tienen mayor influencia en el pálido gobierno colorado".***

5 "Una serie de cuestionamientos afectan al presidente del INDERT, Horacio Torres, por parte de dos organizaciones productivas: la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), quienes denunciaron "desatenciones y dificultades para trabajar". Diario Última Hora (30-08-2019) Disponible en https://www.ultimahora.com/crisis-indert-arp-se-retira-la-junta-y-ugp-advierte-renunciar-n2841038.html

6 Productores se alinean a favor de Friedmann: "Tiene que ganarse la confianza" Diario Hoy (17-09-2019) Disponible en https://www.hoy.com.py/nacionales/productores-se-alinean-a-favor-de-friedmann-tiene-que-ganarse-la-confianza

lización de la lucha campesina, desde donde se han realizado declaraciones violentas e infames contra las organizaciones campesinas y sus formas de protesta. Se ha llegado al colmo de afirmar que los movimientos sociales han sido infiltrados por el crimen organizado[7] y que solo buscan la desestabilización del gobierno; un relato carente de argumentos reales y que busca justificar la represión contra las organizaciones sociales.

La crisis política también se tradujo en una crisis de institucionalidad, vacíos de liderazgos en los distintos ministerios, por momentos inmovilizados, sin capacidad de gestión y de respuestas a las demandas económicas y sociales de diversos sectores. En el caso campesino se multiplicaron las movilizaciones para exigir atención estatal ante situaciones de emergencia relacionadas a la producción de alimentos, defensa territorial, rubros de renta, endeudamientos, así como la falta de caminos, infraestructura, atención médica y sanitaria, en otras palabras, el abandono intencional de la política estatal hacia las familias campesinas e indígenas. Las protestas campesinas en el primer año de Abdo Benítez movilizaron al menos a 27.000 personas en distintos puntos del territorio nacional[8].

*"se multiplicaron las movilizaciones para exigir atención estatal ante situaciones de emergencia relacionadas a la producción de alimentos, defensa territorial, rubros de renta, endeudamientos, así como la falta de caminos, infraestructura, atención médica y sanitaria, en otras palabras, el abandono intencional de la política estatal hacia las familias campesinas e indígenas"*

Esta crisis política está siendo agudizada por un escenario de retracción económica[9] que impactó negativamente en las condiciones de vida de la población creando mayor desaprobación hacia las gestiones gubernamentales.

## La evaluación de las organizaciones

En las entrevistas realizadas a las organizaciones campesinas se solicitó a cada una, una evaluación de la gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez durante el año 2019 en materia de política agraria y tierra, que puedan describir y analizar los aspectos positivos de la acción gubernamental, los aspectos negativos y las perspectivas o desafíos para el movimiento social, específicamente el campesinado organizado, para el año 2020.

En el Cuadro siguiente se presentan en forma muy resumida las respuestas de las cinco organizaciones entrevistadas: Federación Nacional Campesina (FNC), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) y la organización CULTIVA. Se puede observar que en el análisis realizado por las personas entrevistadas, no existen aspectos positivos a destacar, mientras que los aspectos negativos están vinculados a una política represiva que se utiliza para dar respuesta a problemas sociales y la incertidumbre de una política agraria lejana a las necesidades campesinas. Coinciden en que el año próximo será un año de grandes movilizaciones sociales que dará mayor protagonismo a los movimientos sociales.

7 Según Acevedo, crimen organizado intoxica a los movimientos sociales Diario Última Hora (30-10-19) Disponible en https://www.ultimahora.com/segun-acevedo-crimen-organizado-intoxica-los-movimientos-sociales-n2851951.html

8 Irala, A. 2019. "Campesinos/as e indígenas criminalizados por un modelo excluyente". En: Con la soja al cuello 2019. Disponible en http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2019/12/SAC19web_compressed.pdf

9 BCP confirma una retracción del PIB en 2,5% en la primera mitad del año. Diario ABC color (01-10-2019). Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/10/01/bcp-confirma-una-retraccion-del-pib-en-25-en-la-primera-mitad-del-ano/

## Cuadro: Resumen de la evaluación del año 2019 de las organizaciones campesinas

| | | |
|---|---|---|
| **Aspectos positivos** | FNC | Ninguna |
| | MCP | Ninguna, reclamos puntuales a partir de luchas. |
| | OLT | Ninguna, sólo promesas iniciales. |
| | CONAMURI | Ninguna |
| | CULTIVA | Ninguna |
| **Aspectos negativos** | FNC | Respuestas represivas a problemática de tierra, agudización de violencia. |
| | | Crisis económica, falta de precios a productos campesinos, sin apoyo estatal. |
| | | Crisis climática que afecta a comunidades. |
| | MCP | Respuestas represiva a problemática de tierra, agudización de violencia. |
| | | Crisis económica, falta de precios a productos campesinos, sin apoyo estatal. |
| | | Crisis climática que afecta a comunidades. |
| | OLT | Respuestas represiva a problemática de tierra, agudización de violencia. |
| | | Crisis económica, falta de precios a productos campesinos, sin apoyo estatal. |
| | | Avance de agronegocios y expulsión de familias campesinas. |
| | CONAMURI | Inestabilidad política, corrupción y narcopolítica. |
| | | Institucionalidad no dan respuesta al campesinado, si a los intereses del agronegocio. |
| | | Mayor extranjerización y violencia. |
| | CULTIVA | Respuestas represiva a problemática de tierra, agudización de violencia. |
| | | Institucionalidad no dan respuesta al campesinado, si a los intereses del agronegocio. |
| | | Amedrentamiento a dirigentes campesinos. |
| **Desafíos/ Perspectivas** | FNC | Grandes movilizaciones |
| | MCP | Grandes movilizaciones y unidad de sectores populares. |
| | | Nuevo modelo de producción y comercialización. |
| | OLT | Fortalecimiento organizativo. |
| | | Grandes movilizaciones y unidad de sectores populares. |
| | CONAMURI | Unidad |
| | | Luchas y resistencia en territorios y comunidades. |
| | CULTIVA | Grandes movilizaciones y unidad de sectores populares. |

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a organizaciones campesinas.

*"El gobierno carece de una política general o integral que pueda abordar la cuestión referida a la realidad campesina"*

## Aspectos Positivos

El consenso entre las organizaciones campesinas es que no existen puntos positivos desarrollados por el gobierno de Mario Abdo Benítez en lo que se refiere a política agraria y tierra.

Varias de ellas fueron tajantes al afirmar que no existe nada positivo que rescatar. Otras dijeron que existieron promesas, hubo mesa de diálogo llamada por el gobierno, pero quedó en la nada, sin ningún avance. El gobierno carece de una política general o integral que pueda abordar la cuestión referida a la realidad campesina; en una de las entrevistas se mencionó que en caso de que haya existido alguna atención, esto responde a casos muy puntuales que fueron acordados a partir de la movilización y la presión

campesina, no como parte de un programa o plan impulsado por el gobierno.

## Aspectos Negativos

En general las organizaciones campesinas tienen una evaluación negativa del gobierno de Mario Abdo Benítez, lo caracterizan como un gobierno que actúa al servicio de los sectores más poderosos económicamente y que no responde a los intereses de las mayorías sociales. Además algunas organizaciones lo caracterizaron como un gobierno corrupto y débil, principalmente tras lo que fue la crisis institucional de mediados de año.

*"lo caracterizan como un gobierno que actúa al servicio de los sectores más poderosos económicamente y que no responde a los intereses de las mayorías sociales. Además algunas organizaciones lo caracterizaron como un gobierno corrupto y débil, principalmente tras lo que fue la crisis institucional de mediados de año".*

Entre los principales puntos negativos expresados por las organizaciones se encuentra la respuesta represiva que dio el gobierno a la problemática de la tierra. Para las organizaciones, el año estuvo marcado por los desalojos violentos contra ocupaciones campesinas, e incluso destacaron los desalojos contra ocupaciones urbanas -conocidas como asentamientos de sin techos-. En este marco se resalta el hecho de la derogación del llamado "Protocolo de Desalojos" una suerte de plan de acción interinstitucional entre la policía, el Ministerio Público y otras instituciones, que establecía una intervención gradual en los casos de ocupaciones de tierras. Este instrumento fue derogado en setiembre pasado, con fuertes presiones por parte de los gremios del agronegocio; desde entonces la Policía Nacional está facultada a realizar desalojos sin orden de juez competente y sin mediaciones previas. Esto es rechazado por las organizaciones campesinas quienes señalan que aumentó la violencia en el campo durante el último año.

Algunas organizaciones destacaron también la criminalización y persecución que sufren sus integrantes. Señalaron que varios militantes campesinos se encuentran con medidas alternativas a la prisión, con arresto domiciliario u obligados a "prestar servicios" que consisten en limpieza de comisarías o iglesias, como "condena" en causas vinculadas a lucha por el territorio.

Las organizaciones señalan al Ministerio del Interior y al Ministerio Público como las instituciones responsables de la política de violencia y persecución contra el campesinado.

Otro de los puntos más cuestionados por las organizaciones tiene relación con la crisis económica que atraviesa el campesinado, agudizada por la retracción económica general del país. Según señalan los dirigentes, esta situación se tradujo en la imposibilidad de comercializar los productos campesinos a un precio adecuado que permita a las familias productoras garantizar la rentabilidad y la continuidad de la producción. Las organizaciones cuestionan principalmente la falta de políticas públicas de apoyo a la producción y comercialización de sus productos, relatan que esta situación tuvo una grave repercusión social en el sector rural ya que las familias campesinas quedaron prácticamente sin ingresos, lo que llevó a que miles de pequeños productores se movilicen en distintos puntos del país a lo largo del año para exigir respuestas al gobierno.

Otra arista destacada en este punto guarda relación con el creciente endeudamiento del campesinado, tanto con la banca pública como con la banca privada, reclamo que viene siendo presentado desde hace años en diferentes movilizaciones y que no ha tenido una respuesta cabal por parte del gobierno. Según señalaron las organizaciones, la falta de precios y la imposibilidad de comercialización de los productos dejó a varias familias endeudadas con los bancos, en muchos casos las ga-

rantías de los préstamos bancarios son las propias tierras de los campesinos y campesinas que quedan en riesgo de ser despojados de su principal medio de producción, reproducción y vida.

Los reclamos señalados en este punto caen bajo la responsabilidad principal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y también se vinculan con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) como entidad que debería ser responsable de sostener el crédito dedicado a la pequeña producción rural.

También vinculado a la cuestión productiva aparece el cuestionamiento respecto a la falta de políticas que ayuden a frenar las consecuencias de la crisis climática. Durante 2019 Paraguay sufrió dos fenómenos climáticos extremos, la inundación que se vivió en la primera parte del año seguida de una aguda sequía, ambos eventos afectaron gravemente a los pequeños productores campesinos. Las organizaciones señalaron que tanto las inundaciones como la sequía, afectaron gravemente al campesinado y a su posibilidad de producir alimentos para el autoconsumo y para la renta, y cuestionaron que desde el Poder Ejecutivo no existieran políticas para paliar los daños causados por la crisis climática. Al respecto desde la FNC señalaron "sequías, tormentas, inundaciones, atrasaron y perjudicaron la producción y la poca infraestructura, el Estado no tomó ninguna medida concreta al respecto".

Otro reclamo en que coincidieron las organizaciones campesinas consultadas para el presente informe, guarda relación con la fragilidad de las instituciones que deberían atender las necesidades y reclamos de campesinos, campesinas e indígenas; en este sentido desde la organización CONAMURI, mencionaron que "el INDERT y el INDI pueden desaparecer" haciendo alusión a proyectos de ley elaborados sin consultar con las organizaciones, y que podrían dejarse las funciones de estos entes en manos de otras reparticiones del Estado. Al mismo tiempo, las organizaciones cuestionan que las instituciones responsables de atender la problemática campesina tengan una alta dependencia de los gremios vinculados al agronegocio, haciendo referencia de forma puntual al nombramiento de Mario Vega al frente del INDERT[10]; Vega es miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay y su nombramiento fue producto de las negociaciones políticas con los gremios sojeros para que los mismos apoyen al Ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann.

Entre los reclamos al gobierno vinculados a la política de tierras, y por ende al INDERT, las organizaciones señalan que no existe una política estatal que apunte a entregar tierras a los campesinos; las organizaciones coinciden en que los pocos casos donde se logró recuperar parte de las tierras malhabidas que existen en el país, fue mediante las ocupaciones y las luchas de los campesinos y campesinas organizados. Los reclamos respecto a la regularización y asistencia a Asentamientos que llegaron hasta el ente rector de la política de tierras no encontraron respuestas satisfactorias según indicaron las organizaciones.

Dentro del análisis respecto a la institucionalidad y la legislación vigente en torno a la realidad campesina, algunas organizaciones mencionaron su disconformidad con la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar Campesina. Aunque con matices, las organizaciones mencionaron que dicho instrumento jurídico no solucionará la problemática del campesinado

***"Las inundaciones como la sequía, afectaron gravemente al campesinado y a su posibilidad de producir alimentos para el autoconsumo y para la renta, y cuestionaron que desde el Poder Ejecutivo no existieran políticas para paliar los daños"***

10 Abdo pone el INDERT en manos de sojeros. http://www.baseis.org.py/abdo-pone-el-indert-en-manos-sojeros/

en materia de producción. A pesar de que varias organizaciones campesinas habían trabajado en un proyecto de ley que proteja y promueva la agricultura campesina, refirieron que la ley promulgada por sanción ficta (6286/19) no responde al proyecto original por el cual varias organizaciones campesinas se habían movilizado.

En este contexto de abandono al campesinado en sus principales reclamos –tierra y producción– las organizaciones denuncian que existe un avance del agronegocio sobre territorio campesino. Según indican, esto continúa generando la expulsión permanente de comunidades campesinas que se ven forzadas a partir hacia las ciudades, mientras los territorios campesinos son ocupados por latifundistas extranjeros. Además, una de las organizaciones mencionó que el proceso de expulsión campesina está acompañado de un achicamiento de la cobertura de los programas sociales como Tekoporá y la pensión alimentaria a adultos mayores.

*"En este contexto de abandono al campesinado en sus principales reclamos – tierra y producción – las organizaciones denuncian que existe un avance del agronegocio sobre territorio campesino. Según indican, esto continúa generando la expulsión permanente de comunidades campesinas"*

## Desafíos y/o perspectivas

A pesar de los hechos negativos que afectan a las familias campesinas, las organizaciones entrevistadas mantienen su optimismo y presagian un año cargado de luchas y movilizaciones, creen que el accionar gubernamental no será muy diferente al actual, por lo tanto las acciones de protesta cobrarían fuerza para reclamar las demandas insatisfechas.

En este marco de ideas se refirieron a la necesidad de unidad entre las organizaciones campesinas "En el 2020 se debe insistir en la unidad de todos los sectores populares para hacer frente al avance del agronegocio y de los sectores poderosos", indicaron desde el MCP, en coincidencia con otras organizaciones.

Pero los desafíos para el sector no se limitan a las acciones directas, de exigencias y de reclamos. Varias organizaciones hicieron referencia a un trabajo interno, de crecimiento y fortalecimiento organizativo, trabajo en la formación de sus bases y buscando también alternativas económicas que le permitan a sus asociados/as afrontar desde la organización la crisis por la que atraviesan, centrados principalmente en formas de producción y comercialización colectiva y cooperativa.

Se puede inferir así que las movilizaciones y acciones campesinas aumentarían. Ante esto el gobierno deberá resolver si abre una instancia de diálogo que le permita dar alguna respuesta, por más aislada que sea, o hace caso omiso a las exigencias y aumenta sus mecanismos represivos, con las consecuencias políticas que éstas puedan ocasionar.